

# **LA FISCALIZACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS**

Juan José Linares San Román\*

Uno de los problemas más graves que padece el Estado peruano es el de la corrupción, la cual lamentablemente tiene antigua data en Latinoamérica; por ello Bolívar decía que el talento sin probidad era el azote de nuestros países. El ordenamiento jurídico nacional contiene normas destinadas a combatir la corrupción en el ámbito estatal tanto a nivel constitucional como a nivel legal, cuyo cumplimiento debe materializarse respetando los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso en sede administrativa.

De esta manera, tenemos que la Constitución vigente en su Artículo 41° establece la obligación de hacer declaración jurada de bienes y rentas para los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. En esta norma también se advierte la finalidad de la misma, al señalarse que cuando se presume enriquecimiento ilícito del funcionario o servidor público, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. Se trata entonces de combatir la corrupción procesando penalmente a aquellos funcionarios o servidores públicos que no pueden justificar su patrimonio.

Asimismo, en el Artículo 82° de la Constitución se indica que la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. De esta manera, efectuando una interpretación sistemática y concordada de ambas normas constitucionales se puede concluir que le corresponde a la Contraloría General de la República la fiscalización de las declaraciones juradas de bienes y rentas que periódicamente deben presentar los funcionarios y servidores públicos.

En cumplimiento de las normas constitucionales precitadas, esto es, para fiscalizar la referidas declaraciones juradas, la Contraloría General de la República se ampara en el literal a) del Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, que prescribe como una de sus atribuciones, el tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aún cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual. Igualmente, dicho órgano contralor se remite al literal p) de esta norma que la faculta a recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a Ley.

---

\* Magistrado de la Corte Superior de Lima

Sin embargo, se han producido casos en los cuales la fiscalización de las mencionadas declaraciones juradas se ha practicado en forma notoriamente extemporánea. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Cuál es el plazo que tiene la Contraloría General de la República para efectuar una acción de control?. Una revisión de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, no ayuda a absolver esta interrogante, puesto que existe norma sobre el particular. En consecuencia, en vía supletoria cabe remitirse a lo dispuesto en el 233.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1029, que establece: *“La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”*. Sobre el punto, debe tenerse presente que el plazo prescriptorio era de cinco años antes de la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1029.

De acuerdo, a lo señalado anteriormente se puede concluir que la fiscalización de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que presenten los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a ley debe efectuarse dentro de los cuatro o cinco años posteriores a la fecha de su presentación, según sea el caso, de lo contrario opera la prescripción de esta acción de control. En este sentido, la Contraloría General de la República debería abstenerse de realizar acciones de control cuando hubieran transcurrido dichos plazos; sin embargo, como se ha indicado anteriormente se vienen practicando fiscalizaciones extemporáneas, esto es, ocurre lo contrario.

Estas fiscalizaciones no sólo resultan tardías, sino que sobretodo afectan el derecho fundamental al debido proceso de los fiscalizados, puesto que después de haber transcurrido los plazos de cuatro años o cinco años, según sea el caso, resulta complicado, por decir lo menos, obtener la profusa documentación sustentatoria, que usualmente solicita el personal de la Contraloría General de la República, para acreditar la subsanación de las observaciones que se formulan al momento de efectuar la fiscalización de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que presenten los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a ley.

De esta manera, al dificultarse la obtención de la referida documentación sustentatoria se afecta el derecho de defensa del fiscalizado y por ende el derecho fundamental al debido proceso, que también resulta aplicable en sede administrativa como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. De otro lado, no resulta razonable solicitar la presentación de documentos después de haber transcurrido cuatro o cinco años de presentada la respectiva declaración, puesto que de acuerdo a las reglas de experiencia, muy pocas personas archivan permanente los comprobantes de pago de los bienes muebles que adquieren, o registran documentalmente las variaciones de los montos de las remuneraciones u honorarios de sus cónyuges. Además los fiscalizados podrían presumir validamente que no necesitan continuar archivando dichos documentos, en caso lo hubieran hecho, si ya transcurrieron los plazos

prescriptivos precitados, esto es, presumir que el órgano de control no ha hallado reparo alguno a sus declaraciones.

A manera de conclusión, se puede plantear que sería positivo que la Contraloría General de la República se dedique a efectuar oportunas acciones de control y fiscalizaciones a cuestionadas entidades del sector público, en lugar de hacerlo extemporáneamente respecto a las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos, las que deberían practicarse aleatoriamente dentro de los plazos establecidos legalmente.